

Instituto de Investigaciones Gino Germani

VI Jornadas de Jóvenes Investigadores

10, 11 y 12 de noviembre de 2011

Ignacio Sabbatella

Instituto de Investigaciones Gino Germani

ignaciosabbatella@yahoo.com.ar

Eje 6: Espacio social – Tiempo - Territorio

Petroleras, desigualdad ambiental y conflicto social en el norte de Salta (1999-2001)

Resumen

En este trabajo expondré uno de los apartados de mi tesis de maestría, recientemente presentada: “La ecología política de la privatización de YPF: mercantilización de los hidrocarburos y valoraciones alternativas (1989-2001)”.

La expansión de la formación social capitalista en su fase neoliberal no sólo profundiza las desigualdades sociales, económicas y políticas sino que también es el fundamento estructural de la ampliación de las desigualdades ambientales. Las mismas se manifiestan de dos formas: desigualdad en el acceso a y control de los bienes naturales y desigualdad en el acceso a un ambiente sano. Frecuentemente, suscitan conflictos ambientales a partir de la acción colectiva de sectores sociales afectados.

Una vez desarrollados dichos conceptos, abordaremos el conflicto social en el norte de la provincia de Salta entre 1999 y 2001. Tras la privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), la región sufrió el impacto de la desocupación y pobreza pero también la creciente apropiación de los medios de vida de la población y la degradación del ambiente por parte de las petroleras privadas. Así lo denunciaron ex trabajadores de YPF nucleados en la Unión de Trabajadores Desocupados de Gral. Mosconi, organización que protagonizó las sucesivas puebladas. Aplicamos una metodología cualitativa, a través de la recopilación de materiales periodísticos y de bibliografía específica y, posteriormente, el análisis de contenido.

1) Introducción

El presente artículo forma parte del último capítulo de mi tesis de maestría: “La Ecología Política de la privatización de YPF: mercantilización de los hidrocarburos y valoraciones alternativas”, presentada a mediados de junio de 2011. El tema de estudio es la reforma estructural del sector de hidrocarburos en Argentina operada desde fines de la década del ochenta del siglo pasado. En un breve período de tiempo, no solamente se llevó a cabo una total desregulación del mercado y privatización de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), sino que también fue transformada la concepción dominante sobre los hidrocarburos vigente hasta entonces: de “recursos estratégicos” a simples mercancías exportables o *commodities*.

A fin de abordar dicho cambio de concepción y sus implicancias, el marco teórico se conformó fundamentalmente a partir de los aportes del Marxismo Ecológico y de la Ecología Política. El propósito de la Ecología Política es estudiar la relación entre la sociedad y la naturaleza: tanto la forma en la cual el hombre se apropia y utiliza su entorno natural, como las representaciones e ideologías que prevalecen en dicho vínculo¹. Esa relación se establece en el marco de determinadas relaciones sociales de producción y reproducción. Bajo la formación social capitalista el intercambio con el mundo natural se funda preponderantemente en la apropiación privada y en la mercantilización del mismo. Por esa razón, consideramos necesario partir desde las categorías del Marxismo Ecológico, teoría que añade una segunda contradicción del capitalismo: no sólo la relación contradictoria entre capital-trabajo sobre la cual se centró el marxismo tradicional, sino también la relación capital-naturaleza².

En definitiva, el objetivo general de la investigación era comprender de qué manera se había realizado la transformación de la concepción predominante de los hidrocarburos durante la desregulación y privatización de la actividad petrolera en el período 1989-2001. Específicamente, indagamos tanto las representaciones de los principales actores políticos y privados, así como la relación establecida entre el Estado y el capital. Al mismo tiempo, identificamos y analizamos las valoraciones alternativas de actores opositores con el fin de evaluar el grado de conflictividad en el proceso de imposición de la representación mercantil. Precisamente, aquí nos adentraremos en una de las dimensiones conflictivas de dicho proceso. En primer lugar, expondremos las principales características de la reforma estructural del

¹ Tomamos como referentes de esta corriente a Alimonda (2009), Leff (2003 y 2004) y a Martínez Alier (2005 y 2009). Además, sumamos los aportes de Galafassi (1998, 2006 y 2009)).

² Véase entre otros: O'Connor (2001), Altvater (2003), Sabbatella (2010) y Sabbatella y Tagliavini (2010).

sector petrolero y gasífero bajo los designios de la hegemonía neoliberal y sus consecuencias. En segundo lugar, describiremos los factores que incidieron en la debilidad política de la oposición, especialmente aquellos sectores vinculados históricamente con el nacionalismo petrolero, y la adhesión acrítica del sindicalismo.

Por último, el escenario descripto nos permitirá entender el aumento de la conflictividad social y la emergencia de nuevos actores sindicales y sociales en la segunda mitad de la década de los noventa. El caso particular que trataremos es el estallido social en el norte de Salta, antiguo enclave ypefeano, y la acción protagónica de la Unión de Trabajadores Desocupados de Salta (UTD). Junto a la pobreza y a la desocupación habían crecido también las desigualdades ambientales, cuyos fundamentos dieron origen al resurgimiento y reformulación del nacionalismo petrolero.

Con el fin de registrar las concepciones de los principales referentes de la UTD acerca de la actividad petrolera privada y sus efectos socioambientales, realizamos un relevamiento del archivo periodístico y de fuentes secundarias. Seguidamente aplicamos un análisis de contenido cualitativo³.

2) Hegemonía neoliberal y transformación del sector petrolero

Durante décadas, en Argentina el petróleo y el gas fueron caracterizados como “recursos estratégicos” no sólo por su peso ineludible en la matriz energética nacional, sino también por el surgimiento y ampliación transversal en toda la sociedad de la ideología del nacionalismo petrolero, cuyos orígenes se remontan al descubrimiento del primer yacimiento de Comodoro Rivadavia en 1907 y a la creación de YPF en 1922. En el contexto de la posguerra y del avance de los trusts internacionales, el nacionalismo petrolero tenía como pilares la “industrialización, autosuficiencia económica, hostilidad al capital extranjero y fundamentalmente la necesidad de dar al Estado un papel activo como promotor de la empresa pública” (Favaro y Morinelli, 1991: 69). El predominio de aquella ideología se correspondía con un determinado régimen de acumulación capitalista a escala nacional, denominado industrialización por sustitución de importaciones (ISI), y una forma de Estado

³ “Es una técnica de interpretación de textos, ya sean escritos, grabados, pintados, filmados (...) se basa en la lectura (textual o visual) como instrumento de recogida de información, lectura que a diferencia de la lectura común debe realizarse siguiendo el método científico, es decir, debe ser, sistemática, objetiva, replicable, y válida”, según la definición que aporta Andreu Abela (2001: 2).

interventor, que controlaba la actividad a través de YPF⁴. Esto no quiere decir que la hegemonía del nacionalismo petrolero haya estado exenta de contradicciones, tensiones y conflictos. En cambio, nos interesa destacar que los principales partidos políticos (PJ y UCR) mantuvieron entre sus objetivos el autoabastecimiento y, hasta 1976, el rol predominante de YPF había sobrevivido a gobiernos democráticos y dictatoriales. Las disputas políticas pasaban por la incorporación o no de la inversión privada a la actividad, que se traducía en la dicotomía monopolio estatal o explotación mixta ya que los hidrocarburos eran concebidos como insumos estratégicos para el crecimiento del sector industrial.

A partir de la dictadura cívico-militar de 1976, ese régimen fue desmontado a favor de un patrón de valorización financiera y primarización de la economía, marcando el inicio de la hegemonía neoliberal a nivel nacional como parte de un proceso mundial liderado por EEUU y el capital financiero. La doctrina del neoliberalismo se había constituido en la salida de la crisis de sobreacumulación de mediados de los setenta a través de un conjunto de mecanismos de “acumulación por desposesión” (Harvey, 2007). En Argentina no se consolidó en toda su dimensión hasta 1989, cuando asumió la presidencia Carlos Menem y se viabilizó la conformación de un bloque social de poder integrado por acreedores externos y grupos económicos locales, liderados por la fracción financiera del capital.

La consolidación del régimen neoliberal y la adecuación de la forma de Estado bajo la hegemonía menemista involucraron la denominada valorización financiera, la privatización de amplios sectores de la actividad económica, la re-regulación de los mercados y la apertura económica. Se trató de “una ofensiva, sin precedentes, sobre las condiciones de vida de los trabajadores” (Bonnet, 2008: 36), pero también una inédita expansión mercantil sobre los bienes de la naturaleza. A dicho proceso lo hemos denominado “subsunción real de la naturaleza al capital” (Sabbatella, 2010: 73). Si dentro de la teoría marxista tradicional se instituye el concepto de “subsunción real del trabajo al capital” (Marx, 2001:72), desde allí podemos proyectar la naturaleza subsumida a las necesidades del capital: la producción

⁴ El régimen o patrón de acumulación de capital “alude a la articulación de un determinado funcionamiento de las variables económicas, vinculado a una definida estructura económica, [una] peculiar forma de Estado y las luchas entre los bloques sociales existentes” (Basualdo, 2007: 6). El Estado, entendido como forma de relaciones sociales capitalistas (Holloway, 1992), se articula en sus diferentes modalidades históricas con cada régimen de acumulación. La noción forma de Estado se diferencia de aparato de Estado, como el conjunto de instituciones en las que descansa, y “remite a las configuraciones particulares que asume el Estado capitalista a través de sus metamorfosis históricas” (Bonnet, 2008: 20). Existe una correspondencia, aunque no automática, entre forma de acumulación y forma de Estado, que en todo caso está sujeta a las relaciones de fuerza que se cristalizan en cada momento histórico.

En nuestra investigación, el establecimiento a nivel histórico de un régimen de acumulación y su forma estatal correspondiente supone también la difusión de una ideología o representación hegemónica sobre la apropiación social de la naturaleza.

capitalista en escala ampliada se apoya en un mundo natural crecientemente mercantilizado, que no sólo provee de valores de uso sino también que adquiere un precio mediante el cual puede ser enajenado y apropiado. El capital incluye y subordina a la naturaleza en un proceso simultáneamente extensivo e intensivo. Extensivo porque el capital se va adueñando de cada porción de la naturaleza, ampliando las fronteras de extracción como continuidad de la acumulación originaria. E intensivo porque cada vez precisa una mayor cantidad de bienes naturales y de sometimiento de las fuerzas naturales para incorporarlos como medios de vida y medios de producción.

Por tanto, la política petrolera neoliberal avanzó sobre los pilares del nacionalismo petrolero. Desde el Estado se operó el pasaje discursivo hacia la mercantilización del petróleo y gas: fueron despojados de todo sesgo estratégico en función de la libre apropiación y comercialización en manos del capital petrolero. En sus primeros seis meses de gobierno, Menem dictó tres decretos que desregularon el mercado de hidrocarburos: 1055/89, 1212/89, 1589/89⁵. Al mismo tiempo, dieron inicio a la nueva concepción de los hidrocarburos como *commodities* o mercancías exportables⁶. La ley 24.145 de “Federalización de los hidrocarburos y privatización de YPF” habilitó a partir de 1992 la venta de activos y acciones de la empresa estatal que concluyó en 1999 con la compra de prácticamente la totalidad del paquete accionario por parte de la petrolera transnacional Repsol.

De manera lógica, con un marco regulatorio más que favorable, el capital petrolero persiguió la maximización de sus ganancias y la minimización de sus costos. La evidencia fue el incremento de la extracción de los pozos ya conocidos y más productivos; el aumento de las exportaciones de petróleo crudo y gas natural conjuntamente con la mengua de su industrialización; la caída de la exploración y ausencia de inversiones de riesgo; y por último, la baja abrupta del horizonte de vida de los hidrocarburos que persiste hasta la actualidad.

Los capitales individuales propician una acción cortoplacista en pos de monetizar los recursos fósiles en el presente y convertir a la actividad en un mero negocio rentable. La ideología neoliberal es la expresión más cruda de la relación entre capital y naturaleza: incremento de la

⁵ A través de ellos se abrieron la privatización de áreas secundarias y de recuperación asistida, la libre disponibilidad de los hidrocarburos extraídos; la eliminación de las cuotas de crudo; la reconversión de los contratos en concesiones o asociaciones; la libre importación y una mayor flexibilidad de las exportaciones; hasta el 70% de libre disponibilidad de las divisas obtenidas por exportaciones; libertad de precios del petróleo y derivados; libre instalación de refinerías y bocas de expendio.

⁶ Una afirmación extrema de este argumento la pronunció el Secretario Julio César Aráoz cuando se negaba a emplear el mecanismo de capitalización de deuda externa en la privatización: “el petróleo es cash en todo el mundo” (Clarín, 20 de septiembre de 1989). En un tono similar se expresaba el Ministro de Obras y Servicios Públicos, Roberto Dromi: “Aquellos que vengán a invertir tendrán que traer dólares porque el petróleo es una moneda de cambio corriente” (Clarín, 5 de octubre de 1989).

velocidad de extracción aún a costa de su agotamiento y de la degradación del medioambiente y colocación de las mercancías en el mercado donde se obtenga el mejor precio posible. Es una ideología que no repara en límites naturales: las reservas son grandes caudales de dinero desaprovechados. Si alguna vez las reservas mermasen hasta su agotamiento, la solución la proveerá el mismo mercado a través de la importación de los combustibles necesarios a pesar del perjuicio que puede provocar para el capital en su conjunto.

3) Del ocaso a la reconfiguración del nacionalismo petrolero en los 90

3.1) Primera mitad de la década: debilidad política de la oposición

El proceso de mercantilización de los hidrocarburos y privatización de YPF es inescindible de las transformaciones del régimen de acumulación y la decisión política de un gobierno que entre 1989 y 1995 ganó todas las elecciones por amplio margen. La estabilidad económica lograda a través del Plan de Convertibilidad se convirtió en una herramienta fundamental con la cual se cerró el nuevo consenso conservador (Bonnet, 2008).

Sin embargo, aún nos queda entender otro factor relacionado que determinó la velocidad y profundidad del proceso: la debilidad política de las fuerzas de oposición, buena parte de ellas atravesadas históricamente por el nacionalismo petrolero.

Mientras que el Partido Justicialista se adecuó, salvo excepciones individuales, a los nuevos preceptos neoliberales, el principal partido de oposición, la Unión Cívica Radical, rechazó fuertemente la ley de privatización en el Congreso pero su caudal electoral y político había mermado abruptamente tras la salida anticipada del sillón presidencial por parte de Alfonsín a mediados de 1989.

Asimismo, es necesario registrar la debilidad opositora a partir del desempeño de la izquierda partidaria, el sindicalismo y los militares, tal como lo hace Sang-Hyun Yi (2008). Se trata de tres sectores que a priori deberían haber cumplido un rol más importante en el resguardo de la empresa petrolera estatal, de acuerdo a sus principios históricos. Por distintos motivos no forjaron una oposición seria a los planes privatistas. No nos detendremos aquí a desglosar todas las variables en juego para alcanzar una explicación completa, sólo realizaremos algunas consideraciones.

Al momento de la aprobación de la ley de privatización de YPF en 1992, la izquierda partidaria contaba con sólo cuatro diputados: tres miembros de Unidad Socialista-Honestidad, Trabajo y Eficiencia (US-HTE) y uno del Movimiento al Socialismo (MAS). Mientras que

Guillermo Estévez Boero, Alfredo Bravo y Ricardo Molinas de Unidad Socialista presentaron una disidencia total al dictamen de mayoría y no se hicieron presentes físicamente en los dos días de sesión, Luis Zamora en representación del MAS tuvo una extensa alocución en el recinto. De cualquier manera, la incidencia de la izquierda parlamentaria no era significativa como para poner en peligro la privatización. Las razones de su débil incidencia pueden encontrarse tanto en el contexto internacional (expansión del bloque capitalista comandado por EEUU tras la caída del régimen soviético), como en factores de orden interno (la histórica cercanía del movimiento obrero al peronismo que reduce sus oportunidades electorales y el desmembramiento de las organizaciones políticas y sindicales planificado por la dictadura cívico-militar).

Por otra parte, las Fuerzas Armadas habían sido una de las referencias principales del nacionalismo petrolero en sus orígenes, con la impronta del General Enrique Mosconi y sus firmes convicciones para llevar adelante la creación de YPF. Eran épocas de entre-guerra que retrataban una gesta militar cercana a los intereses del sector industrial y de la defensa nacional. Lejos de aquella gesta se encontraba la Junta Militar encabezada por Jorge Rafael Videla: el golpe de Estado de 1976 fue el inicio del proceso de desindustrialización, desnacionalización y liberalización de la economía argentina. Tras la derrota en la guerra de Malvinas y el retorno de la democracia, las Fuerzas Armadas quedaron sumergidas en un profundo desprestigio a medida que se daban a conocer públicamente los aberrantes crímenes de lesa humanidad que habían perpetrado. Por tanto, es sencillo comprender que, si habían abandonado las banderas del nacionalismo petrolero y se encontraban cada vez más desprestigiadas, las FF.AA. no podían constituirse en un actor de oposición a la reforma petrolera.

Finalmente, nos queda registrar el papel jugado por el sindicalismo. El Sindicato Unido de Petroleros del Estado (SUPE) nacido 1946, se integró a la Confederación General del Trabajo (CGT) en 1949 y tomó las banderas del nacionalismo petrolero. Tenaz opositor a los contratos frondicistas, jugó también un rol fuertemente crítico a las políticas petroleras privatistas de Alfonsín. Empero, el sindicato flexibilizó radicalmente sus posiciones ante el triunfo del peronismo en 1989. Avaló sin prejuicios la política desregulatoria y aceptó la privatización de YPF con algunos reparos que fueron compensados con ciertas concesiones. En ningún momento el sindicato reivindicó el carácter estratégico del petróleo como lo hiciera históricamente, sino que se mostró más preocupado por el destino de la empresa estatal.

Además de la participación accionaria por medio del Programa de Propiedad Participada, Orlansky y Makón (2003: 10) registran otras concesiones otorgadas por el gobierno al

sindicato: subsidios para comprar parte de la empresa vendida a propietarios privados, con contratos para dar trabajo a obreros despedidos; subsidios para la Obra Social Petrolera (OSPE); retiro voluntario o jubilación anticipada; y reconocimiento del monopolio de la representación, a pesar de la existencia de otro sindicato de trabajadores en el sector (la Federación Argentina Sindical del Petróleo y Gas Privados, FASPyGP). Como ocurrió con otros gremios, el SUPE se adecuó al programa de privatizaciones, participando por medio de la tercerización de servicios o de la administración de fondos de jubilación o pensiones. Su estrategia de “supervivencia organizativa” lo llevó a transformarse en un “sindicato de negocios” (Orlansky 1997), optando por la política de la negociación en lugar de la confrontación.

El alineamiento del sindicato fue casi automático a no ser por importantes resistencias que se dieron a nivel local en las filiales de Vespucio (Salta), Comodoro Rivadavia (Chubut), y Ensenada (Buenos Aires), pero que no lograron un peso en las decisiones de la organización a nivel nacional.

Por último, nos queda destacar que, como “sindicato de negocios”, el rol del SUPE no se limitó a la gestión de las empresas prestatarias de servicios a YPF sino que también se sumó a la dirección de YPF S.A. Sus principales dirigentes, Ibáñez y Cassia, se incorporaron al directorio en representación de las acciones clase C de la empresa. Fueron partícipes necesarios de la venta de acciones estatales y de la gestión privada de la empresa hasta 1999.

Excede nuestras posibilidades sentenciar el nivel de complicidad del sindicato en la privatización, aunque sí es posible corroborar la adhesión a priori a un gobierno de signo peronista, más allá del grado de viraje de sus banderas tradicionales, los reacomodamientos al interior del partido justicialista y la capacidad de maniobra del gobierno a partir del poder acumulado en medio de una crisis económica agobiante. A lo largo de la década, el poder sindical iría mermando ante la concentración y centralización del capital, en este caso de las empresas petroleras, y la creciente desocupación y precarización laboral en el marco de la implementación del programa neoliberal.

3.2) Segunda mitad de década: nuevo ciclo de protesta social

El segundo quinquenio de la década de los noventa presentó características notoriamente diferentes y novedosas respecto al anterior. La aplicación del programa neoliberal había logrado la estabilidad al precio del estancamiento económico y la regresión social (Castellani, 2002), que se cristalizaba en el incremento de la desocupación y de la pobreza. Además, los

embates de las crisis externas, tales como el “efecto tequila”, machacaban una economía doméstica cada vez más desgastada producto del agotamiento de la etapa de privatizaciones de empresas públicas y por tanto del ingreso de dinero en las arcas del Estado. Si el desenvolvimiento del primer gobierno de Menem no encontró importantes resistencias, o supo desactivarlas oportunamente, el segundo mandato estuvo marcado por el ascenso de un nuevo ciclo de protesta social.

Al mismo tiempo, los partidos políticos no lograban presentar alternativas reales de gobierno y los sindicatos se encontraban cada vez más deslegitimados. Es entonces que la crisis de representación, es decir la separación entre dirigentes y dirigidos y entre estructuras de representación y representados, se presentó como condición de posibilidad del surgimiento de nuevos actores sociales.

Fueron múltiples las nuevas experiencias sindicales y sociales que expresaron aquella crisis. En la tesis nos enfocamos en dos experiencias surgidas al calor de las transformaciones del sector de hidrocarburos: la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina (FeTERA) y la Unión de Trabajadores Desocupados de Gral. Mosconi (UTD). Ambas organizaciones, a su modo, revitalizaron la caracterización estratégica del petróleo y gas, al tiempo que incorporaron nuevos elementos a la comprensión de la interacción entre economía política y ecología. En términos de O'Connor (2001), plantearon una nueva politización en relación al acceso a los medios de vida y medios de producción provistos por la naturaleza, mediante prácticas y valoraciones alternativas a la hegemonía neoliberal.

Aquí nos limitaremos a presentar el caso de la UTD a partir del estallido social que, con intermitencias, se desarrolló entre 1997 y 2001.

4) Riqueza petrolera, pauperización y desigualdades ambientales: estallido social en el norte salteño

Ubicada a unos 300 kilómetros de la capital de la provincia de Salta, cercano a la frontera con Bolivia, en el Departamento de Gral. San Martín, se encuentra la ciudad de Gral. Mosconi, la cual cuenta con una cifra cercana a los 20.000 habitantes. A sólo 10 kilómetros está la ciudad de Tartagal, cabecera del departamento.

Esta región forma parte de la Cuenca Noroeste, segunda reserva de gas del país y rica en petróleo. Su crecimiento demográfico, económico y urbano se lo debe fundamentalmente a la expansión de la actividad productiva de YPF a partir de la década del 20 en el siglo pasado.

Inversamente, la ruina económica y la pauperización social crecieron a la par del retiro de la empresa estatal y la sustitución de sus operaciones por parte de las petroleras privadas.

Con su puesta en marcha en 1962, la refinería de Campo Durán se constituyó como un polo de industrialización de los hidrocarburos extraídos en la zona y los provenientes de Bolivia. A partir del desprendimiento de activos de YPF, Campo Durán quedó en manos de la empresa Refinor, aunque sus accionistas mayoritarios y por lo tanto controlantes fueron sucesivamente YPF S.A. y Repsol YPF. Entre las actividades que realiza Refinor están la refinación de petróleo, la industrialización de gas, el transporte de productos y la comercialización.

Los yacimientos de la zona quedaron en manos de Pluspetrol, Tecpetrol, Parker Dilling, Seperbol, Texaco, empresas que impusieron una drástica reducción de personal (que comenzó antes de la privatización) y una prolongación de la jornada laboral con reducción salarial para los trabajadores que permanecieron en las mismas (Aguilar y Vázquez, 1998). Buena parte de los ex trabajadores conformaron cooperativas prestadoras de servicios pero pocas lograron subsistir. El aumento de la desocupación no tardó en hacer efecto sobre la actividad comercial de la zona y sobre las administraciones locales, las cuales a su vez ajustaron su plantilla de empleados. En la intendencia de Gral. Mosconi, por caso, la mitad del personal quedó fuera (Aguilar y Vázquez, 1998: 45-48). A nivel provincial, el magro panorama se agudizó con la reforma del Estado aplicada por el gobernador Juan Carlos Romero a partir de 1995. El resultado en esta región fue más de un 50% de desocupación.

La pauperización social generada por la privatización de YPF fue el trasfondo de los numerosos cortes de ruta que se sucedieron a partir de 1997, pero comenzaban con un reclamo particular, por ejemplo el cuestionamiento hacia la empresa suministradora de energía eléctrica, hasta derivar en reclamos más generales y multisectoriales. Un año antes, los pueblos petroleros de Cutral Có y Plaza Huincul en la provincia de Neuquén habían protagonizado el primer corte de ruta de amplia repercusión nacional, popularizándose el término “piquete”. En el caso del norte salteño existe un antecedente concreto en 1991, cuando trabajadores de YPF iniciaron una huelga y bloquearon la ruta 34, que atraviesa varias localidades hasta llegar a la frontera boliviana, con el fin de detener el vaciamiento de Campo Durán.

Aquellas acciones fueron el preludio de la derrota y privatización de YPF. En cambio, cobraron dimensiones impensadas los cortes de ruta de mayo y noviembre de 2000 y junio de 2001. Los bloqueos se extendieron por varios días, recibieron una dura respuesta represiva y culminaron con “puebladas”: miles de personas acudiendo a defender a los “piqueteros” agredidos. Mientras que el gobierno provincial optó siempre por una política represiva sin

condicionamientos, desde el gobierno nacional se enviaba un mensaje ambivalente entre la negociación y la represión, fruto de las internas que tenía la propia coalición gobernante. La primera estrategia propició la distribución de planes sociales entre los más afectados por la desocupación, en tanto que la segunda derivó en cada ocasión en el inmenso despliegue de efectivos de Gendarmería Nacional.

La Unión de Trabajadores Desocupados (UTD) había nacido en 1996 como un espacio aglutinador de ex trabajadores de YPF desde el cual reclamaban “trabajo genuino” y demandaban la reestatización de la empresa (Wahren, 2009). A partir de los cortes de ruta y de las puebladas, la organización se erigió como referente de la protesta social. Svampa y Pereyra afirman que “gracias al protagonismo de los ex ypefeanos, se estableció un rápido enlace entre las categorías de piquetero y la de trabajador” (2003: 137).

La distribución de cientos de planes sociales en la zona fue encargada a la propia organización, pero sus prácticas no se agotaron en ella sino que se abrieron a la creación de emprendimientos productivos de carácter autogestivo y al trabajo comunitario. En el proceso de ampliación de demandas fueron integrando a diferentes sujetos sociales dentro de la UTD: mujeres y jóvenes sin trayectorias laborales previas, comunidades indígenas, sectores profesionales y de clase media de la región, y pequeñas poblaciones de la región de Las Yungas (Wahren, 2009).

La UTD, analizan Svampa y Pereyra, es una organización autónoma que tiene “tres valores básicos: un alto grado de combatividad, la defensa acérrima de la cultura del trabajo y la nostalgia de un modelo de integración social” (2003: 148). Agregan que entre sus objetivos están la “recuperación del Estado”, el “desarrollo de una cultura productiva” y la “reconstitución del tejido comunitario”. Teniendo en cuenta dicho análisis, a nosotros nos interesa destacar las reivindicaciones de la UTD respecto a la actividad petrolera, aspecto que muchas veces ha sido descuidado. Sus principales referentes, José “Pepino” Fernández, Juan Carlos “Gipi” Fernández y Rodolfo “Chiqui” Peralta, trazaron sus carreras laborales en la YPF estatal y guardan en sus representaciones y prácticas la impronta del nacionalismo petrolero.

El saber experto de estos ex trabajadores del sector petrolero fue y es transmitido pedagógicamente hacia otros miembros que no estuvieron vinculados a la actividad, especialmente a los más jóvenes. Lamentablemente, no han plasmado sus posiciones en documentos o publicaciones propias por lo que debemos acudir a fuentes secundarias: al archivo periodístico y a la sistematización de los diálogos con los miembros de la UTD que el Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía realizó durante 2001.

La empresa estatal era mucho más que una empresa dedicada a la explotación petrolera. Era el promotor del desarrollo socioeconómico de las regiones más apartadas de Argentina. Al respecto, uno de los referentes de la UTD afirma: “YPF era una empresa mal organizada pero dejaba mucha plata, no daba pérdida. YPF operaba siempre en las provincias, en pueblitos como nosotros, que no nos tienen en cuenta en los grandes centros urbanos como la Capital Federal. Pero de acá sale la verdadera riqueza. Porque Mosconi es el segundo productor de gas del país, Neuquén el primero (...) además YPF hizo escuelas, universidades, caminos, prestó plata para Vialidad Nacional, Vialidad Provincial. Nunca esa plata fue devuelta a YPF. Por eso decimos que YPF era la columna vertebral del país. Cuando estaba YPF en Mosconi, era el 95% que tenía de gente ocupada o relacionada (Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía, 2006: 15)”.

Por el contrario, la política neoliberal de los noventa redujo la región al valor económico de su subsuelo. El gas natural y el petróleo crudo reportaban mayor interés como valor de cambio exportable que la posibilidad de ser insumos del desarrollo industrial de la zona. En las palabras de otro referente se advierte un claro sentimiento de despojo respecto a la riqueza natural: “Acá están las plantas de almacenaje, con gran parte del gas y del petróleo que se van a Brasil y a Chile, donde otros países se desarrollan y nosotros acá no tenemos una industria. El gobierno tanto provincial como nacional son los que hacen la entrega de nuestras riquezas” (Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía, 2006: 17).

Desde su percepción, los beneficios económicos obtenidos por los gobiernos provincial y nacional no se condecían con el estado de abandono social al que quedó sometida la localidad de Mosconi. En medio del estallido social de noviembre de 2000, “Pepino” Fernández ilustra una paradoja: “cada vez producimos más y estamos más abajo, las regalías no llegan a los pueblos petroleros” (Clarín, 7 de noviembre de 2000). Por esa razón, la UTD colocó como una de sus primeras demandas desde su creación la distribución de un mayor porcentaje de regalías para el departamento de Gral. San Martín, al mismo tiempo que una “reparación histórica” mediante un fondo destinado al financiamiento de obras de infraestructura. Así lo expresaba un referente: “Mosconi desde hace muchos años viene dando muchos beneficios a la Nación y a la provincia. Que le den un fondo especial de hidrocarburos. No puede ser que no tenga cloacas, luz, que no se construyan escuelas, que haya quedado todo abandonado” (Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía, 2006: 19).

Los efectos estructurales de la política neoliberal en el norte de Salta tienen al menos dos dimensiones: socioeconómica, en lo que refiere al aumento del desempleo y de la pobreza, y socioambiental, en lo que atañe a la apropiación privada de los bienes de la naturaleza y la

degradación ambiental. Sin perder de vista la importancia de los efectos socioeconómicos, en este trabajo profundizaremos el análisis de la segunda dimensión. Los efectos socioambientales del modo de producción capitalista en su forma neoliberal de acumulación generan “desigualdades ambientales” (Sabbatella, 2008 y 2010). Existen al menos dos formas en las que se manifiesta la desigualdad ambiental: la desigualdad en el acceso a y control de los bienes naturales y la desigualdad en el acceso a un ambiente sano. La primera forma se refiere a las asimetrías de poder existentes para disponer, aprovechar, utilizar bienes esenciales para la vida, tales como agua, tierra y energía. La segunda forma está relacionada con la protección del medioambiente y con las asimetrías de poder en la distribución de los efectos de la degradación ambiental derivada de actividades productivas: contaminación del aire y del agua provocada por las actividades extractiva, industrial y turística; por la disposición final de residuos; o por grandes obras de infraestructura.

La desigualdad ambiental atraviesa distintos tipos de desigualdad social que generan nuevos actores afectados por los mismos. A las acciones colectivas desencadenadas por estos actores Giarracca (2006) las denomina disputas por la apropiación y/o mantenimiento de los recursos naturales. Aquí añadimos en la definición que también son disputas por el acceso a un ambiente sano o por la protección del medioambiente. De manera similar, Martínez-Alier (2005) utiliza el concepto conflictos ecológico-distributivos para designar el desigual impacto del uso que la economía hace del ambiente natural.

Si solamente tenemos en cuenta las acciones colectivas desencadenadas a partir de los efectos socioeconómicos, la UTD es un movimiento de trabajadores desocupados -o movimiento piquetero- como tantos otros que surgieron en el espacio urbano a fines de la década del noventa y que aceleraron la crisis político-social que desembocó en la renuncia del presidente Fernando De la Rúa en diciembre de 2001. Si sumamos las acciones orientadas frente a los efectos socioambientales, la UTD es también un movimiento social de base territorial constituido en relación a su hábitat de vida compartido (Seoane, Taddei y Algranati, 2006).

En el norte de Salta es ostensible la presencia de ambas formas de desigualdad ambiental. Hacia ellas se han dirigido las representaciones y las prácticas de la UTD. Con respecto al primer forma, la desigualdad en el acceso a y control de los bienes naturales, “Pepino” Fernández declaraba ante la prensa: “Estoy cansado de que todo siga igual. Las petroleras multinacionales tienen una ganancia diaria de 30 millones de pesos y acá no queda un peso (...) No puede ser que nuestro departamento sea el segundo productor de gas del país y no tengamos gas natural. Tampoco hay agua suficiente, la traen desde el norte, pero en los meses secos a la noche no sale una gota de los caños. Podrían construir un acueducto desde Río Seco

que cuesta 350.000 pesos pero no lo hacen. Eso es lo que molesta, que cansa. ¿Me entiende?” (Página 12, 20 de junio de 2001).

La creciente apropiación de los medios de vida de la población local –en este caso, gas y agua- por parte de las petroleras privadas está en la base del conflicto social y, por consiguiente, son también conflictos ecológico-distributivos.

Existen algunas diferencias sutiles en el discurso y las prácticas de la UTD con respecto a la ideología del nacionalismo petrolero. Como ex trabajadores de YPF conservaban la prédica de la empresa que condujera el Gral. Enrique Mosconi, quien también diera su nombre a la localidad donde viven. Sin embargo, la caracterización del petróleo y del gas como “recursos estratégicos” se asocia menos a los destinos de la “Nación” que a los de su territorio (o hábitat de vida compartido) y de su población.

Por otro lado, la explotación intensiva de los hidrocarburos por parte de las petroleras degrada las condiciones de vida locales, repercutiendo en el desigual acceso a un ambiente sano. La lógica del capital petrolero es acelerar la extracción con una baja prioridad en la eficiencia en lo relativo al cuidado del entorno, el depósito de desechos o la prevención de accidentes y derrames. La protección y la remediación del ambiente son “gastos inmediatamente improductivos desde el punto de vista del capital en expansión” (O’Connor, 2001: 203). Probablemente, el aporte más novedoso de la UTD sea su permanente denuncia de los efectos ambientales y sanitarios de la actividad petrolera privada, empeñada en el resguardo de su rentabilidad. Según relata “Gipi” Fernández: “con el cierre de YPF, vimos cómo ha desaparecido parte de nuestra cultura, de nuestra identidad. Junto a la desocupación, crecieron otros problemas. La empresa petrolera, las multinacionales, entraron a deforestar la selva. Empiezan a romper los caminos y a hacer las picadas, y nosotros no tenemos contención arriba en las sierras. Eso crea problemas climáticos. Hemos tenido un alud de barro, donde murieron familias (...) las petroleras derraman en los ríos productos químicos. Nosotros tenemos el 60% de enfermos de diabetes, y tenemos personas enfermas del corazón y de la cabeza gracias a los productos químicos que nos entregan las multinacionales. Las aguas nuestras están contaminadas. Tenemos enfermedades como el dengue, leishmaniasis, hantavirus (...) esa es una parte de lo que hacen las empresas petroleras y lo que realmente nosotros tenemos acá, que lo único que recibimos son migajas y marginación” (Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía, 2006: 66).

Con posterioridad a 2001, límite temporal en el que se circunscribe nuestro estudio, se iría consolidando la organización interna de la UTD en múltiples proyectos productivos. También su lucha ineludible por la “recuperación de los recursos naturales” (petróleo, gas, tierra,

agua) y el cuidado de las condiciones de vida locales. A través de denuncias judiciales y acciones directas (como el bloqueo de las puertas de acceso a las empresas), señalarían la responsabilidad directa de las petroleras así como la negligencia del Estado.

5) Conclusiones

Condiciones políticas, sociales, económicas y ambientales dieron lugar al estallido del norte de Salta. Pese a que hemos observado ese conjunto de condiciones desde una perspectiva de totalidad, las desglosaremos con fines analíticos.

En cuanto a los factores políticos, el estallido tuvo lugar en medio de una crisis de representación de la oposición política y el comienzo del resquebrajamiento de la hegemonía neoliberal. El conflicto atravesó los gobiernos nacionales de Carlos Menem y de Fernando De la Rúa, así como al gobierno provincial de Juan Carlos Romero.

Por otra parte, el inédito incremento de los niveles de pobreza y de desempleo sentaron las bases para un nuevo ciclo de protestas sociales que se condensó en el surgimiento de nuevos actores sindicales y sociales. Los piquetes y las puebladas fueron parte de los nuevos repertorios de acción.

En términos económicos, las privatizaciones profundizaron las brechas regionales en una zona con abundantes recursos naturales respecto a la obtención de regalías e impuestos por parte de la provincia y de la Nación que no se destinaron a la inversión industrial local. De allí la demanda por una “reparación histórica” para el Departamento de San Martín.

Por último, nos interesaba destacar especialmente la dimensión ambiental: la política petrolera neoliberal facilitó una lógica de explotación rapaz en detrimento de las condiciones materiales de vida de las poblaciones aledañas. La movilización y denuncia pública desde la UTD dieron cuenta de profundas desigualdades ambientales originadas en el marco de la reforma estructural del sector y de la transformación del petróleo y gas en meros *commodities*.

En ese contexto, hubo un renacer del nacionalismo petrolero que expresó viejas y nuevas reivindicaciones. La UTD aportó novedades sustanciales al antiguo esquema nacionalista: un énfasis mayor en la reactivación de la economía local que en la figura abstracta de la Nación y la incorporación entre sus reivindicaciones de la protección del medioambiente, en particular la preocupación por la incidencia de la extracción petrolera como factor contaminante. Ha cuestionado los efectos de la actividad petrolera privada desde una perspectiva integral en relación a su entorno local, tanto la degradación ambiental como la desposesión de sus medios de vida. Situación que poco ha cambiado hasta el día de hoy.

6) Bibliografía

Aguilar, María Angela y Vázquez, Estela (1998). *Flexibilización salvaje en la selva chaco-oranense. El caso de Orán y Tartagal (Salta)*. Revista Realidad Económica, N° 153, Buenos Aires.

Alimonda, Héctor (2009). *Una introducción a la Ecología Política latinoamericana* [CLASE], en el curso: “Ecología política en el capitalismo contemporáneo”. (Programa Latinoamericano de Educación a Distancia, Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Buenos Aires, Junio 2009).

Altvater, Elmar (2003). *La teoría marxista hoy, problemas y perspectivas ¿Existe un marxismo ecológico hoy?* Disponible en www.bibliotecavirtual.clacso.org.ar, consultado el 7/12/2010.

Andréu Abela, Jaime (2001). Las técnicas de análisis de contenido: una revisión actualizada, en “Documento de trabajo CENTRA” 2001/03. Disponible en: <http://public.centrodeestudiosandaluces.es/pdfs/S200103.pdf>.

Basualdo, Eduardo (2007). *Concepto de patrón o régimen de acumulación y conformación estructural de la economía*. Documento N° 1, Área de Economía y Tecnología de la FLACSO, Maestría en Economía Política con Mención en Economía Política.

Bonnet, Alberto (2008). *La hegemonía menemista: el neoconservadurismo en Argentina (1989-2001)*. Buenos Aires: Prometeo.

Castellani, Ana (2002). Implementación del modelo neoliberal y restricciones al desarrollo en la Argentina contemporánea. En Schorr, et.al. *Más allá del pensamiento único. Hacia una renovación de las ideas económicas en América Latina*. Buenos Aires: Clacso-Unesco.

Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía (2006) *Piqueteros Mosconi. Cortando las rutas del petróleo*, 2ª edición. Buenos Aires: Ediciones Madres de Plaza de Mayo.

Favaro, Orietta y Morinelli, Marta (1991). *Petróleo, estado y nación*. Buenos Aires: CEAL.

Galafassi, Guido (1998). *Aproximación a la problemática ambiental desde las ciencias sociales. Un análisis desde la relación naturaleza-cultura y el proceso de trabajo*. Revista Theorethikos, año 1, N° 6.

_____ (2006). *Ecología: Producción de conocimiento, ciencia y mercado capitalista*. Consideraciones acerca de los estudios sobre sociedad-naturaleza. Revista Herramienta, N° 29, Buenos Aires.

_____ (2009). *La predación de la naturaleza y el territorio como acumulación*. Revista Herramienta, N° 42, Buenos Aires.

Giarracca, Norma (2006). *La tragedia del desarrollo: disputas por los recursos naturales en Argentina*. Revista Sociedad, N° 27. Facultad de Ciencias Sociales, UBA, Buenos Aires.

Giarracca, Norma y Wahren, Juan (2005) *Territorios en disputa: iniciativas productivas y acción política en Mosconi, Argentina*, en Revista OSAL N°16. Clacso, Bs. As.

Harvey, David (2007). *El nuevo imperialismo*. Madrid: Akal.

Holloway, John (1992). *La reforma del Estado: capital global y Estado nacional*. Perfiles latinoamericanos, revista de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede México, ISSN 0188-7653-0188-7653, N°. 1, páginas 7-32.

Leff, Enrique (2003). *La Ecología Política en América Latina. Un campo en construcción*. Revista Polis, N° 5, Santiago de Chile.

_____ (2004). *Racionalidad ambiental. La reapropiación social de la naturaleza*. Buenos Aires: Sigo Veintiuno.

Martínez Alier, Joan (2005). *Los conflictos ecológico-distributivos y los indicadores de sustentabilidad*. Disponible en: <http://www.rebellion.org/noticia.php?id=22206>, consultado el 10/8/2010.

Martínez Alier, Joan (2009). *Conflictos ecológicos y lenguajes de valoración*, [CLASE], en el curso: “Ecología política en el capitalismo contemporáneo”. (Programa Latinoamericano de Educación a Distancia, Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Buenos Aires, Mayo 2009).

O’Connor, James (2001). *Causas naturales. Ensayos de marxismo ecológico*. Siglo veintiuno editores. México.

Orlansky, Dora (1997). *Reforma del Estado, reestructuración laboral y reconversión sindical. Argentina 1989-1995*. Revista Estudios Sociológicos de El Colegio de México, N° 45, pp 623-638.

Orlansky, Dora y Makón, Andrea (2003). *De la sindicalización a la informalidad. El caso Repsol-YPF*. Revista Argentina de Sociología, N° 1, pp. 7-26.

Sabbatella, Ignacio (2008). *Capital y Naturaleza: crisis, desigualdad y conflictos ecológicos*. Ponencia, II Jornadas de Economía Política de la Universidad Nacional de General Sarmiento.

_____ (2010). *Crisis ecológica y subsunción real de la naturaleza*. Revista Iconos, Flacso Ecuador, N° 36, páginas 69-80.

Seoane, José, Taddei, Emilio y Algranati, Clara (2006). *Movimientos sociales y neoliberalismo en América Latina*. Buenos Aires: mimeo.

Seoane, José y Taddei, Emilio (2010). *Recolonización, bienes comunes de la naturaleza y alternativas desde los pueblos*. Diálogo de los Pueblos.

Svampa, M. y Pereyra, S. (2003). *Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras*, Buenos Aires: Editorial Biblos.

SUPE (1996). Resúmenes históricos, en el cincuentenario de la biblioteca Gral. Mosconi, N° 182, Ensenada.

Wahren, Juan (2008). Construyendo territorios. Corporaciones, movimiento social y proyectos autogestionados en Mosconi, Salta (Argentina). En Mançano Fernandes, Bernardo (Comp.) *Campesinato e Agronegocio na América Latina: a questao agrária atual*, Sao Paulo, CLACSO / Expressao Popular.

Wahren, Juan (2009). *Territorialidades en disputa: Movimientos Sociales, Autogestión y Recursos Naturales. El caso de la UTD de Gral. Mosconi (Salta, Argentina)*. Congress of the Latin American Studies Association, Rio de Janeiro, Brazil June 11-14.

Wahren, Juan (2009). *Acciones colectivas, autogestión, territorios en disputa y nuevas identidades sociales. El caso de la UTD de Gral. Mosconi, Salta*. Tesis de maestría, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.

Diarios:

Ámbito Financiero

Clarín

El Cronista Comercial

La Nación

Página 12